



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general
18 de diciembre de 2014
Español
Original: ruso

Comité de Derechos Humanos

113º período de sesiones

16 de marzo a de 2 abril de 2015

Tema 7 del programa

**Examen de los informes presentados por los Estados partes
en virtud del artículo 40 del Pacto**

Lista de cuestiones relativa al séptimo informe periódico de la Federación de Rusia

Adición

Respuestas de la Federación de Rusia a la lista de cuestiones*

[Fecha de recepción: 2 de diciembre de 2014]

Respuestas a las cuestiones adicionales de los expertos del Comité de Derechos Humanos, relativas al séptimo informe periódico de la Federación de Rusia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Respuesta a la cuestión 1

1. De acuerdo con la Constitución de la Federación de Rusia (en lo sucesivo denominada "la Constitución"), los tratados internacionales en que sea parte la Federación de Rusia y los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional tienen supremacía sobre la legislación nacional. Como consecuencia, los tribunales rusos aplican diligentemente las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, "el Pacto") junto con otros acuerdos internacionales de derechos humanos ratificados. Existen numerosos ejemplos de esta aplicación en los sistemas rusos de información jurídica por vía electrónica, a los cuales es posible acceder, entre otros medios, a través de Internet.

2. Los textos de los dictámenes emitidos por el Comité de Derechos Humanos (en adelante, "el Comité") relativos a la Federación de Rusia y otros Estados, así como los

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial



textos de las observaciones generales pueden consultarse en el sitio web interno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia (en lo sucesivo denominado "el Tribunal Supremo"). Esa información se encuentra a disposición de todos los tribunales ordinarios, incluyendo los juzgados de paz. Al 5 de noviembre de 2014 se habían hecho públicos los textos de 103 dictámenes del Comité. Al mismo tiempo, en los informes trimestrales sobre la práctica judicial del Tribunal Supremo se publican extractos de los dictámenes aprobados por el Comité, como por ejemplo en los informes correspondientes a los trimestres segundo, tercero y cuarto de 2013, así como en los relativos al período de enero a julio de 2014. En los seminarios que se organizan con jueces y funcionarios de la administración de justicia se ofrece con regularidad información sobre la actividad actual del Comité.

3. En lo que se refiere a los procedimientos nacionales para el cumplimiento de los dictámenes del Comité, el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia (en adelante, "el Tribunal Constitucional"), en su resolución N° 1248-O de 28 de junio de 2012, indicó la necesidad de un cumplimiento responsable por parte de las autoridades de los dictámenes del Comité. En dicha resolución el Tribunal Constitucional estimó que si en los dictámenes aprobados por el Comité se pedía a la Federación de Rusia que volviera a examinarse una causa, dicha petición era fundamento suficiente para que el fiscal dictara la reapertura de la causa por la aparición de hechos nuevos, siempre que la violación de las disposiciones del Pacto advertida por el Comité no pudiera ser subsanada de otro modo, y que tal subsanación fuera imprescindible para garantizar la justicia de una sentencia (resolución o auto) firme y para restablecer los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos de la Federación de Rusia y demás personas. Esto está en consonancia además con el párrafo 9 de la resolución N° 5 del pleno del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia de 10 de octubre de 2003, según la cual a la hora de administrar justicia los tribunales deberán tener en cuenta que una aplicación incorrecta por su parte de los principios universalmente reconocidos, las normas de derecho internacional y los acuerdos internacionales en que sea parte la Federación de Rusia pueden dar lugar a la anulación o modificación de una resolución judicial.

4. Todos los casos examinados con arreglo a los procedimientos del Protocolo Facultativo del Pacto son objeto de un exhaustivo análisis por parte de las autoridades competentes de la Federación de Rusia. En relación con cada dictamen del Comité se toman medidas para un examen profundo y pormenorizado.

Respuesta a la cuestión 2

5. La prohibición general de cualquier tipo de discriminación está directamente consagrada en el artículo 19 de la Constitución, y sus motivos particulares en los artículos 6, 32, 37, 38 y 81. Dichas disposiciones han sido objeto de desarrollo normativo en la legislación federal. De este modo, contienen normas relativas a la prohibición de la discriminación el artículo 3 y el artículo 64, párrafo 2, del Código del Trabajo de la Federación de Rusia, el artículo 4, párrafo 3, y el artículo 18, párrafo 4, de la Ley Federal N° 79-FZ, de 27 de julio de 2004, del Servicio Civil Estatal en la Federación de Rusia, el artículo 7, párrafo 1, de la Ley Federal N° 3-FZ, de 7 de febrero de 2011, del Cuerpo de Policía, el artículo 3, párrafo 1, apartado 2, el artículo 5, párrafo 2, el artículo 12, párrafo 1, el artículo 55, párrafo 1 de la Ley Federal N° 273-FZ, de 29 de diciembre de 2012, de Educación en la Federación de Rusia, los artículos 5 y 71 de la Ley Federal N° 323-FZ, de los Fundamentos de la Protección Sanitaria de los Ciudadanos de la Federación de Rusia, de 21 de noviembre de 2011, y en otros instrumentos normativos.

6. Actúan como instrumentos para la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la discriminación el artículo 5.62 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, así como el artículo 136 del Código Penal de la Federación de Rusia (en adelante, "el Código Penal"). Al mismo tiempo, no puede ejercerse discriminación al

imponer medidas de responsabilidad administrativa o penal (artículo 1.4 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia, y artículo 4 del Código Penal).

7. Entre los cambios legislativos recientes cabe mencionar la Ley Federal N° 162-FZ, de 2 de julio de 2013, por la que se introducen enmiendas en la Ley N° 1032-1, del Empleo de la Población de la Federación de Rusia, de 19 de abril de 1991, las cuales consistieron no solo en la prohibición de divulgar información sobre puestos de trabajo o cargos vacantes que entrañe algún tipo de restricción directa o indirecta de los derechos o privilegio directo o indirecto por motivos discriminatorios, sino también la responsabilidad administrativa por la divulgación de dicha información (artículo 13.11.1 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia). Mediante esta Ley se hizo más precisa la formulación del artículo 5.62 del Código de Infracciones Administrativas, pasando a considerarse además como discriminación la violación de los derechos, las libertades y los intereses legítimos de la persona y el ciudadano por motivos de su situación familiar, social o su edad. Asimismo, se concretaron disposiciones para la lucha contra la discriminación en el Código del Trabajo de la Federación de Rusia.

8. En virtud de la Ley Federal N° 284-FZ, de 22 de octubre de 2013, por la que se modifican varios instrumentos legislativos de la Federación de Rusia relativos a la definición de las competencias y la responsabilidad de los órganos ejecutivos de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia, los órganos de administración autónoma local y sus funcionarios en la esfera de las relaciones interétnicas, pasa a ser competencia de los organismos de administración estatal de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia y los organismos de administración autónoma local la prevención de la discriminación, y se introduce un nuevo supuesto en que puede cesarse al máximo responsable de la enseñanza a nivel municipal: permitir que se incumpla de forma generalizada la prohibición de ejercer discriminación si ello vulnera la convivencia entre etnias y confesiones y propicia el surgimiento de conflictos interétnicos y religiosos.

9. En 2012 la Federación de Rusia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, los poderes públicos toman medidas para incorporar sus disposiciones en la legislación rusa. En particular, el Gobierno de la Federación de Rusia elaboró un proyecto de ley que complementa la normativa en vigor mediante una norma que prohíbe cualquier forma de discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá por discriminación de este tipo cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y civiles garantizados en la Federación de Rusia en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. En mayo de 2014 dicho proyecto de ley fue aprobado por la Duma del Estado de la Asamblea Federal en primera lectura. En la actualidad se está completando su redacción definitiva para su aprobación en segunda lectura.

10. Una de las tareas prioritarias es garantizar los derechos de las personas con discapacidad a la educación a todos los niveles de manera inclusiva y promoviendo el pleno desarrollo de su potencial humano. Dentro del programa federal "Medio accesible" de 2011 a 2015 el Estado consigna recursos significativos para la creación de una red de instituciones educativas que ofrezcan todas las condiciones para la educación de personas con discapacidad.

11. En la Federación de Rusia no existe la institucionalización generalizada de las personas con discapacidad. Al contrario, tal como se señaló en los párrafos 80 y 81 del séptimo informe periódico de la Federación de Rusia sobre la aplicación del Pacto, en la legislación rusa se amplían las garantías de observancia de los derechos del ciudadano en el curso de procedimientos judiciales en que se resuelva sobre su capacidad de obrar. Por otra parte, en marzo de 2015 entrarán en vigor las normas de la Ley Federal N° 302-FZ, de

30 de diciembre de 2012, por la que se introducen enmiendas en los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la Parte Primera del Código Civil de la Federación de Rusia, que prevén el reconocimiento de una nueva categoría de ciudadanos: las personas que, debido a trastornos mentales, solo puedan ser conscientes de sus actos o controlarlos con la ayuda de terceros. Los ciudadanos cuya capacidad de obrar haya sido restringida por un tribunal bajo este supuesto, no serán considerados personas con incapacidad plena, con lo que se reducirán a un mínimo las limitaciones jurídicas de numerosas personas que anteriormente hubieran podido ser declaradas plenamente incapaces. Por consiguiente, dichas enmiendas contribuirán a que la integración de ese colectivo de ciudadanos en la sociedad rusa sea lo más plena posible.

12. La legislación rusa en su totalidad contiene un conjunto de normas que prohíben las distintas formas de discriminación y que otorgan a las víctimas la posibilidad de una defensa efectiva de sus derechos. A ese respecto, sigue reformándose la legislación con el objetivo de consagrar el mayor número de garantías detalladas y eficaces para la prevención de cualquier comportamiento discriminatorio.

Respuesta a la cuestión 3

13. Con arreglo al artículo 19, párrafo 2 de la Constitución, en la Federación de Rusia se garantiza la igualdad de derechos y libertades independientemente de la etnia y otros factores. La base normativa sobre la que se fundamenta el trabajo de las autoridades de Rusia para la integración efectiva del colectivo romaní en la sociedad, consiste, en particular, en los decretos del Presidente de la Federación de Rusia "Promoción de la armonía entre los distintos grupos étnicos", "Marco estratégico de la política estatal de la Federación de Rusia sobre las etnias hasta 2025" y el plan de acción federal titulado "Fortalecimiento de la unidad de la nación rusa y desarrollo etnocultural de los pueblos de la Federación de Rusia (2014-2020). A nivel federal existe el Consejo de la Federación de Rusia para las Relaciones Interétnicas, adscrito a la Presidencia, entre cuyos integrantes está el Presidente de la autonomía nacional-cultural romaní de Rusia N. Demeter.

14. Las autoridades rusas están ejecutando junto con representantes de organizaciones sociales especializadas el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico y Etnocultural de los Romaníes en la Federación de Rusia para 2013-2014 (en adelante, "el Plan Integral"), con miras a fomentar la integración de los romaníes de la Federación de Rusia en la vida pública del país, lo cual incluye la mejora de su nivel educativo, el fomento de los conocimientos jurídicos, la inserción laboral y la prevención del abandono infantil, así como la superación de estereotipos sociales negativos en relación con ese colectivo. Un análisis realizado para medir el grado de aplicación del Plan Integral muestra un significativo aumento de la atención hacia la problemática del colectivo por parte de las autoridades a todos los niveles. Se observa en particular una mejora en la situación en cuanto a la expedición de documentos de identidad a los romaníes, así como en su inscripción en el lugar de residencia o estancia. Las autoridades colaboran en el registro de las asociaciones romaníes con el objetivo de contribuir al desarrollo institucional de ese colectivo.

Respuesta a la cuestión 4

15. La Constitución garantiza la igualdad de derechos y libertades de la persona y el ciudadano independientemente de su orientación sexual. La discriminación hacia cualquier grupo social, incluyendo a los grupos formados por representantes de colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, así como ultraje, constituyen una infracción de la ley de acuerdo con el ordenamiento jurídico de la Federación de Rusia. El ultraje durante una intervención pública o en los medios de comunicación, así como la discriminación por parte de un funcionario en el ejercicio de su cargo, constituyen agravantes (artículo 5.61, párrafo 2, del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia y artículo 136 del Código Penal).

16. Las víctimas tienen derecho a exigir que se enjuicie a los culpables conforme a la ley, así como a recibir una indemnización por el daño moral y material causado, y al desmentido de toda información que atente contra su honor, dignidad y reputación profesional.

17. Los representantes de las minorías sexuales son miembros de pleno de derecho de la sociedad rusa. La política de las autoridades rusas fomenta la tolerancia hacia ellos, así como a la prevención de cualquier acto discriminatorio y el castigo de quienes cometan tales actos (véanse también los párrafos 153 a 157 *infra*).

Respuesta a la cuestión 5

18. En la actualidad, la lista de circunstancias agravantes contenidas en el artículo 63 del Código Penal es bastante exhaustiva. Concretamente el artículo 63, párrafo 1, apartado e), del Código Penal, que tipifica los delitos por motivo de odio o enemistad hacia cualquier tipo de grupo social (entre los cuales se pueden incluir los grupos de personas que hablen determinado idioma o que posean una determinada nacionalidad). Por consiguiente, la comisión de un delito por los motivos de "idioma y nacionalidad" ya está recogida en el Código Penal como circunstancia agravante.

5 a)

19. Tanto en la legislación de la Federación de Rusia como en la práctica funciona un sistema integral de lucha contra las actividades extremistas, cuya base son tanto las disposiciones de la Ley Federal N° 114-FZ, de 25 de julio de 2002, de Lucha contra las Actividades Extremistas, por la que se establece el concepto de extremismo, así como las medidas para su prevención y la represión de las actividades extremistas, como las normas del Código Penal y del Código de Infracciones Administrativas, en los cuales se establecen las responsabilidades tanto penales (arts. 280, 282, 282.1, 282.2 del Código Penal) como administrativas (parte segunda del art. 13.15, arts. 20.3 y 20.29 del Código de Infracciones Administrativas) por la infracción de la ley mediante conductas extremistas. Con arreglo al artículo 63, párrafo 1, apartado e) del Código Penal y con las normas de la parte especial del Código Penal, se considera circunstancia agravante la comisión de un delito por motivos de odio político, ideológico, racial, étnico o religioso, o bien por odio u hostilidad hacia un grupo social determinado.

20. La represión del extremismo y la prevención de los delitos de este tipo son actividades prioritarias de los órganos de orden público y judiciales.

Personas condenadas por tribunales de primera instancia por delitos de actividad extremista como delito principal (arts. 280, 282, 282.1 y 282.2 del Código Penal)

Años	2010	2011	2012	2013
Número de condenas	136	149	187	280

21. La calificación de los actos tipificados en los artículos 213 y 282 del Código Penal no plantea serias dificultades en la práctica. Tales tipos penales defienden bienes jurídicos diferenciados y contemplan elementos tanto de carácter objetivo como subjetivo también diferenciados. Al valorar un acto ilícito, los órganos de instrucción y los tribunales tienen en cuenta todos los hechos constitutivos de la materia del delito, tras lo cual se procede a su consideración penal a partir de un determinado artículo.

22. Las víctimas de delitos de extremismo tienen derecho a indemnización por los daños causados, tanto materiales como morales.

5 b)

23. Con arreglo al Código Penal, están tipificados como delito no solo la comisión de acciones de naturaleza extremista, sino también el mismo hecho de crear asociaciones de tipo extremista y su participación en ellas (art. 282.1), además de la disposición de actividades para organizaciones respecto de las cuales un tribunal haya dictado la orden, ya en vigor, de disolverlas o prohibir sus actividades por su carácter extremista (art. 282.2).

24. Mediante la Ley Federal N° 179-FZ, de 28 de junio de 2014, se introdujo una adición al Código Penal en forma del artículo 282.3, en el que se establece la responsabilidad por la financiación de actividades extremistas.

25. A noviembre de 2014 se había prohibido por sentencia judicial fundamentada la actividad en la Federación de Rusia de 20 organizaciones terroristas y 36 organizaciones extremistas, mientras que en la lista federal de obras de índole extremista habían quedado incorporadas por resolución judicial 2.500 títulos.

26. Las patrullas de cosacos no pertenecen a grupos extremistas. En virtud de la Ley Federal N° 154-FZ, de 5 de diciembre de 2005, relativa al Servicio Estatal de los Cosacos de Rusia, los representantes del colectivo cosaco tienen derecho a tomar parte en las labores de mantenimiento del orden público, así como a participar en el cumplimiento de determinadas funciones públicas de otra índole.

5 c)

27. Con arreglo al artículo 4 de la Ley de la Federación de Rusia de los Medios de Comunicación, se prohíbe la difusión de información de carácter extremista o sobre asociaciones cuya actividad haya sido prohibida o que hayan sido desmanteladas, de acuerdo con las causas previstas en la Ley Federal de Lucha contra las Actividades Extremistas, sin que se indique el hecho de haberse producido tal prohibición o desmantelamiento. Corresponde a los órganos de orden público y judiciales llevar a cabo un control sistemático de la existencia de comunicaciones que no cumplan los requisitos de la legislación contra la discriminación. A los infractores se les aplican las sanciones previstas en la legislación vigente.

28. Con arreglo al artículo 56, párrafo 1, de la Ley Federal N° 67-FZ, de 12 de junio de 2002, de Garantías Básicas de los Derechos Electorales y Plebiscitarios de los Ciudadanos de la Federación de Rusia, queda prohibido emplear cualquier tipo de retórica extremista en la propaganda electoral. La inobservancia de esta prohibición conllevará no solo la expulsión del candidato de la carrera electoral (art. 76, párrs. 7 e) y 8 e)), sino que supondrá la revocación de la decisión de la comisión electoral sobre los resultados de las elecciones (art. 77, párr. 2 c)), así como la inhabilitación del candidato, impidiendo que pueda presentarse a otras elecciones durante un plazo determinado de tiempo (art. 4, párr. 3.2 d)). Además, las personas cuyos antecedentes penales por delitos de extremismo no hayan sido cancelados ni anulados o aquellos a los que haya sido impuesta una sanción administrativa por alguna infracción de las leyes administrativas previstas en los artículos 20.3 y 20.29 del Código de Infracciones Administrativas, serán privadas del derecho a ser elegidas para ocupar cargos públicos (art. 4, párrs. 3.2 b) y 3.2 c)).

Respuesta a la cuestión 6

29. La caracterización racial no es una práctica empleada por los órganos de orden público y judiciales de la Federación de Rusia. Los motivos que llevan al empleo de una u otra medida hacia cada ciudadano obedecen a datos objetivos, que dan fe de la existencia de sospechas fundadas sobre ellos. En cualquier caso, todas las comunicaciones relativas a presuntos abusos de autoridad son sometidas a un control especial en los órganos de instrucción y de la Fiscalía.

Respuestas a la cuestión 7

30. Con arreglo al artículo 19, párrafo 3, de la Constitución, los hombres y las mujeres tienen iguales derechos y libertades e iguales oportunidades para ejercerlos. Tanto el Código del Trabajo de la Federación de Rusia como otras leyes federales y territoriales prohíben la discriminación por motivo de sexo, incluyendo en la remuneración.

31. Las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres de participar en la vida política y socio-laboral de la sociedad rusa. En la actualidad, las mujeres ocupan cargos en el Gobierno y en la Duma del Estado de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia (cámara baja del Parlamento). También dirigen organismos territoriales y locales del poder ejecutivo y legislativo. Asimismo, los máximos responsables del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal (cámara alta del Parlamento), el Banco Central y la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia son mujeres. Las mujeres ocupan además la mayor parte de los puestos en la administración de justicia.

32. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento más completo posible de las obligaciones internacionales de la Federación de Rusia en la esfera de la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer, consagradas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros instrumentos internacionales ratificados por la Federación de Rusia, fue creado un Consejo de Coordinación de Asuntos de Género adscrito al Ministerio de Trabajo y Protección Social.

33. En general la sociedad rusa no está sujeta a "actitudes patriarcales ni a estereotipos profundamente enraizados respecto de los papeles, responsabilidades e identidad de las mujeres y los hombres" que hiciesen necesaria su "erradicación".

Respuesta a la cuestión 8

34. La legislación rusa ya prohíbe todas las formas de violencia doméstica y estipula sanciones penales y administrativas por tales actos. Los tipos penales correspondientes figuran en los artículos 105, 116, 131 y en otras normas del Código Penal.

35. Las autoridades rusas se encuentran completando la redacción definitiva del proyecto de ley federal para la prevención de la violencia doméstica. Sus principales objetivos son la consagración legislativa de las metas y tendencias de las actividades necesarias para prevenir la violencia en el ámbito doméstico, así como la creación de un sistema unificado de protección socio-jurídica contra dicha forma de violencia. En julio de 2014 el proyecto fue debatido en el Consejo para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, adscrito a la Presidencia de la Federación de Rusia.

36. El número de delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres tiende a disminuir. Por ejemplo, en 2010 se registraron 191.200 delitos de este tipo, mientras que en 2013 el número se situó en 165.800. Cada vez que tiene lugar una violación de los derechos e intereses legítimos de la mujer, los órganos de orden público y judiciales practican las comprobaciones oportunas. Con el fin de prevenir estos delitos, la policía se ocupa de identificar a toda persona que haya cometido delitos en el ámbito de las relaciones familiares. En relación con estas personas se aplican medidas preventivas.

37. En cuanto al llamado "rapto de novias en el territorio del Cáucaso Septentrional" es necesario indicar que en la actualidad dicha costumbre histórica prácticamente ha perdido su significado original. El "rapto" de mujeres con fines matrimoniales se ha convertido en un elemento no oficial del ritual del matrimonio. El "rapto" se realiza, por lo general, según un acuerdo alcanzado previamente con la novia y sus familiares y no entraña violencia. En caso de no haber alcanzado un acuerdo para su realización, los actos del responsable se califican con arreglo al artículo 126 del Código Penal (secuestro de personas).

38. Los "asesinatos por motivos de honor" corresponden a la categoría de los llamados asesinatos domésticos, incluyendo los cometidos a consecuencia de relaciones hostiles surgidas de forma inesperada. Cada vez que se producen tales acciones los organismos de orden público llevan a cabo las investigaciones necesarias, como resultado de las cuales se establece la responsabilidad conforme a la ley.

39. Los órganos de la Fiscalía prestan una gran atención a las cuestiones de control de la observancia de la ley en la etapa de admisión y registro de todas las denuncias de delitos que se realizan en los órganos de orden público y judiciales. De este modo, solo durante el primer semestre de 2014, a consecuencia de las medidas adoptadas por la Fiscalía fueron sancionados con medidas disciplinarias más de 40.000 funcionarios de órganos de instrucción, incluyendo a 2.800 funcionarios en la zona federal del Cáucaso Septentrional. Durante ese período en esa zona federal fueron anulados por la Fiscalía 4.800 autos de archivo de la causa.

40. En el artículo 79, párrafo 1, apartado 9, de la Ley Federal de los Fundamentos de la Protección Sanitaria de los Ciudadanos de la Federación de Rusia se establece la obligación de los centros médicos de informar a organismos del Ministerio del Interior sobre el ingreso de pacientes respecto de los cuales existan razones suficientes para suponer que su mal estado de salud se deba a actos ilícitos. En tal caso no se exige el consentimiento del paciente para facilitar dicha información.

41. Las víctimas de violencia doméstica reciben asistencia en centros especializados y multidisciplinarios de asistencia social a la familia y a los niños. Por ejemplo, en 2013 prestaron asistencia a mujeres 389 centros de asistencia social a la familia y a los niños, 15 centros de asistencia psicológica y pedagógica para la población, 905 centros integrados de servicios sociales y 21 centros de crisis para mujeres.

42. Los centros de asistencia social a la familia y a los niños disponen de 176 hospitales con capacidad para 4.153 personas, mientras que los centros integrados de servicios sociales cuentan con 126 hospitales con 2.379 plazas. Los centros de crisis para mujeres poseen 18 hospitales que pueden acoger a 427 personas.

43. En las entidades constitutivas de la Federación de Rusia funcionan 2.310 teléfonos de la confianza, de los cuales 119 están en centros de asistencia social a la familia y a los niños, 13 en centros de asistencia psicológica y pedagógica, 149 en centros integrados de servicios sociales y 14 en centros de crisis para mujeres.

44. En caso necesario, para la protección de las víctimas se adoptan las medidas previstas en la Ley Federal N° 119-FZ, de 20 de agosto de 2004, sobre la protección gubernamental de las víctimas, los testigos y otras partes en el proceso penal.

Respuesta a la cuestión 9

45. Mediante la Ley Federal N° 302-FZ, de 2 de noviembre de 2013, se añadieron al Código Penal los artículos 205.3, 205.4 y 205.5. Dichos artículos concretan los tipos penales relativos a la participación en actividades terroristas, estableciendo la responsabilidad penal adecuada por recibir entrenamiento para llevar a cabo actividades terroristas, así como la organización de asociaciones terroristas y la participación en ellas, además de la organización de las actividades de esas asociaciones y la participación en sus acciones.

46. Asimismo, desde la presentación del séptimo informe periódico, fueron aprobadas las Leyes Federales N° 208-FZ, de 23 de julio de 2013, la N° 130-FZ, de 5 de mayo de 2014, la N° 145-FZ, de 4 de junio de 2014, y la N° 179-FZ, de 28 de junio de 2014, dirigidas a seguir mejorando la reglamentación legislativa de la represión del terrorismo.

47. Con arreglo a los artículos 46 y 47 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia (en adelante, "el Código de Procedimiento Penal"), las personas imputadas o procesadas por haber cometido un acto terrorista u otros delitos de carácter terrorista tendrán los mismos derechos que los que se garantizan a los demás imputados y procesados.

48. La obligación de las autoridades de respetar y proteger los derechos humanos durante las operaciones contra el terrorismo emana de las garantías constitucionales, las cuales se especifican, entre otras leyes, en los artículos 2, 15 y 18 de la Constitución, estableciéndose también claramente en el artículo 2, párrafo 1, de la Ley Federal de Lucha contra el Terrorismo, según la cual la defensa y protección de los derechos y libertades fundamentales del hombre y el ciudadano constituye un principio fundamental de las actividades de lucha contra el terrorismo.

Respuesta a la cuestión 10

49. La prohibición legal de imponer y aplicar la pena de muerte se respeta en la Federación de Rusia desde 1996. Durante ese tiempo se han creado garantías estables del derecho humano a no ser sometido a esa pena y se ha formado un régimen constitucional y jurídico, en cuyo marco se está desarrollando un proceso irreversible dirigido a la abolición de la pena capital. La prohibición de la imposición de la pena de muerte quedó refrendada en el fallo del Tribunal Constitucional de 19 de noviembre de 2009 N° 1344-OR.

Respuesta a la cuestión 11

50. En el séptimo informe periódico se presentó a la atención del Comité información detallada relativa a la observancia de los derechos de los ciudadanos por parte de los funcionarios de los órganos de orden público y judiciales en la zona federal del Cáucaso Septentrional (párrs. 59 a 76).

51. Conviene señalar además que el trabajo que realizan las autoridades contribuye a la estabilización de la situación en el Cáucaso Septentrional, así como a una disminución en el número de delitos. De este modo, según datos del Ministerio del Interior, desde el comienzo de 2014 en el territorio de dicha zona se registraron 15 delitos tipificados en el artículo 126 del Código Penal (secuestro), mientras que durante el mismo período correspondiente a años anteriores dicho número fue de 44 (2011), 51 (2012) y 36 (2013). Al mismo tiempo, está aumentando la proporción de casos de esta categoría que son esclarecidos, representando, en períodos de nueve meses, un 65% en 2014, frente a un 56,8% en 2013, un 42,9% en 2012 y un 33,3% en 2011.

52. Con arreglo al artículo 151, párrafo 2 a), del Código de Procedimiento Penal, en casos de esta categoría la instrucción del sumario de causas penales corresponde a contingentes especializados de un órgano de instrucción independiente: la Comisión de Investigación de la Federación de Rusia (en adelante, "la Comisión de Investigación"). Dentro de dicha Comisión existe una subdivisión especial dedicada a la investigación de casos relacionados con la violación de los derechos civiles (en particular, las desapariciones forzadas) acontecidos durante el desarrollo de la operación de lucha contra el terrorismo en la República de Chechenia, que fueron objeto de examen por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, se ha aplicado una serie de medidas de carácter organizativo y administrativo para mejorar la efectividad de las investigaciones correspondientes.

Respuesta a la cuestión 12*12 a)*

53. La definición de la tortura en la legislación rusa abarca los casos de torturas cometidas por cualquier persona, incluyendo a los funcionarios públicos, ya sea con su consentimiento expreso o tácito. En el caso de los funcionarios públicos, la ley establece un agravante: con arreglo al artículo 286, párrafo 3, del Código Penal, las personas culpables de abuso de autoridad con el empleo de violencia o la amenaza de su uso podrán ser condenadas a penas de hasta diez años de prisión.

54. Por tortura se entiende la imposición de sufrimientos físicos o morales para obligar a una persona a testificar o realizar otros actos contra su voluntad, como castigo o con otros fines. De esta forma, "los actos destinados a forzar a algo a un tercero" también se consideran tortura.

55. En la legislación penal de la Federación de Rusia existe un conjunto de normas que prohíben la tortura (arts. 117, 286, 302 del Código Penal). El hecho de crear un artículo especial para dicha prohibición con el objeto de que la tortura sea considerada un tipo penal específico no contribuiría a la integridad de la reglamentación jurídica en el ámbito correspondiente y por ello no se considera oportuna.

56. El artículo 75 del Código de Procedimiento Penal estipula que las pruebas obtenidas en vulneración de lo dispuesto por la ley (incluido el recurso a la violencia y la tortura, así como cualquier otro tipo de trato cruel, inhumano o degradante) no son admisibles. Estas pruebas carecen de valor jurídico y no pueden sustentar la acusación. Con arreglo al artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, mientras se esté examinando una causa en el tribunal, el acusado tendrá derecho a solicitar la exclusión de alguna de las pruebas que formen parte de los materiales del caso por haber sido presuntamente obtenidas mediante torturas. Durante el examen de dicha solicitud presentada por el acusado, la carga de rebatir los argumentos recaerá en la Fiscalía, tal y como se indica en el artículo 235, párrafo 4, del Código de Procedimiento Penal. En la resolución N° 1, párrafo 3, aprobada por el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia en su sesión plenaria de 29 de abril de 1996, se dan instrucciones concretas a los tribunales sobre la inadmisibilidad como prueba de la información que haya sido obtenida de forma ilícita.

12 b)

57. Las acciones delictivas de los funcionarios de los órganos del orden público y judiciales relacionadas con el empleo de la tortura y otros tratos crueles están tipificadas por la legislación de la Federación de Rusia en el artículo 286, párrafos 3 a), 3 b) y 3 c) del Código Penal (abuso de autoridad con utilización de la fuerza o amenaza de su uso; abuso de poder con empleo de armas y medios especiales; o abuso de poder causando graves daños, respectivamente) y también en el artículo 302, párrafo 2, del Código Penal (declaración bajo coacción junto con el empleo de violencia, humillación o tortura). No es posible tipificar estas acciones con arreglo al artículo 117 del Código Penal, puesto que dicho artículo no recoge los casos de empleo de la tortura en el desempeño de las funciones de un cargo público.

58. A este respecto, tanto el artículo 286, párrafo 3, como el artículo 302, párrafo 2, del Código Penal establecen un límite máximo más elevado en las sanciones aplicables que el que figura en el artículo 117, párrafo 2, de dicho Código.

12 c)

59. De acuerdo con el artículo 151 del Código de Procedimiento Penal, la instrucción de un sumario por una causa penal sobre delitos cometidos por funcionarios públicos

relacionada con el empleo de la tortura u otros tratos crueles es competencia de la Comisión de Investigación, cuyos integrantes poseen las competencias y las atribuciones necesarias para llevar a cabo investigaciones efectivas sobre cada elemento de las correspondientes infracciones. Las causas penales incoadas por circunstancias relacionadas con el empleo de la violencia por funcionarios de orden público se someten a un control especial en la Comisión de Investigación.

60. El número de personas condenadas por los delitos tipificados en el artículo 286, párrafo 3, del Código Penal ascendió a 1.817 en 2010, mientras que en 2011 fue de 1.651, en 2012 de 1.238, en 2013 de 1.116 y en los seis primeros meses de 2014, de 484 personas.

12 d)

61. La legislación rusa prevé varios procedimientos de expulsión de ciudadanos extranjeros y apátridas que se encuentren de manera irregular en el territorio de la Federación de Rusia, entre ellos están la expulsión por vía administrativa y la deportación.

62. La decisión sobre la deportación de ciudadanos extranjeros más allá de las fronteras de la Federación de Rusia recae en el Servicio Federal de Migraciones y en sus organismos territoriales, los cuales tienen en consideración las obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

63. La resolución de expulsión administrativa de ciudadanos extranjeros se toma por vía judicial. En el momento en que un ciudadano extranjero presenta una solicitud de asilo o de concesión temporal de asilo, el procedimiento de expulsión administrativa o de deportación se detiene hasta que se adopte la resolución correspondiente.

64. Las autoridades rusas otorgan una gran importancia a la adopción de medidas encaminadas a la incorporación en el sistema jurídico de la Federación de Rusia de los principios y normas de derecho internacional para la protección de los derechos y libertades en el ámbito de la aplicación de los procedimientos de expulsión y extradición, los cuales se consagran, en particular, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950.

65. Se está trabajando para crear un marco jurídico de cooperación con otros Estados en el ámbito de la readmisión. En la actualidad, de los 16 acuerdos internacionales firmados por la Federación de Rusia sobre readmisión, 12 han entrado en vigor. Otra serie de documentos se encuentra en fase de estudio.

66. Con el objeto de aplicar los acuerdos internacionales suscritos por la Federación de Rusia en materia de readmisión, el Servicio Federal de Migraciones, junto con el Servicio Federal de Seguridad, emitieron la orden N° 331/208, de 15 de abril de 2014, relativa a la aprobación de documentos de viaje para la readmisión (incluyendo la readmisión simplificada) y el procedimiento de su tramitación y expedición. Asimismo, el Servicio Federal de Migraciones emitió la orden N° 333, de 18 de abril de 2014, sobre la derogación de la orden emitida por el mismo Servicio N° 35, de 23 de enero de 2012, junto con la orden N° 358, de 12 de mayo de 2014, relativa a la derogación de las órdenes del Servicio Federal de Migraciones N° 134, de 10 de junio de 2010, y N° 104, de 19 de marzo de 2012, y emitió la orden N° 535, de 30 de septiembre de 2014, relativa a la aprobación de un listado de funcionarios públicos del Servicio Federal de Migraciones y sus organismos territoriales, con potestad para adoptar decisiones sobre readmisiones.

67. Todas las resoluciones en vigor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a la Federación de Rusia por asuntos de este tipo son tomadas en consideración y analizadas en detalle por los órganos competentes. En base a dichas resoluciones, se remiten a las subdivisiones territoriales de los correspondientes órganos instrucciones y recomendaciones metodológicas para impedir que se cometan violaciones de los derechos

de los ciudadanos durante los procedimientos de expulsión o extradición. En la actualidad los jueces, fiscales, instructores, policías y ejecutores judiciales, funcionarios del servicio de migraciones y del sistema penitenciario en el ejercicio de su labor se rigen muy frecuentemente no solo por la legislación de la Federación de Rusia, sino también por las normas aplicables del derecho internacional. A este respecto cabe mencionar que el 14 de junio de 2012, se aprobó en sesión plenaria la resolución del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, N° 11, sobre la práctica del examen por los tribunales de las cuestiones relacionadas con la extradición de personas para su enjuiciamiento penal o la ejecución de una sentencia, así como el traslado de personas para que cumplan condena. Mediante dicha resolución se pudo dar respuesta a una serie de cuestiones problemáticas que surgen en la práctica, entre las que cabe citar las siguientes:

- a) Los fundamentos y el procedimiento de actuación, en relación con las personas sujetas a extradición, de medidas coercitivas de detención provisional;
- b) El procedimiento de examen por los tribunales de las denuncias presentadas por las personas sujetas a extradición;
- c) El procedimiento de examen por los tribunales de cuestiones relacionadas con el riesgo de malos tratos en relación con personas que han de ser extraditadas, por parte de autoridades del país que solicite la extradición y el ofrecimiento por dicho Estado de garantías de que la persona extraditada no será sometida a malos tratos.

68. Dichas explicaciones facilitadas por el Tribunal Supremo fueron valoradas muy positivamente tanto por órganos de orden público y judiciales como por expertos de la Federación Rusa y del extranjero.

69. Además, las autoridades rusas llevan a la práctica un conjunto de medidas que permiten el cumplimiento eficaz y riguroso de los requisitos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la aplicación, de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de medidas sobre la suspensión del procedimiento de expulsión o extradición hasta que se haya tramitado el recurso del solicitante en cuanto al fondo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

70. Como resultado de las medidas adoptadas se observan cambios positivos en la práctica de aplicación de las leyes en Rusia, así como una disminución del riesgo de que se cometan violaciones de los derechos de las personas respecto a las cuales se haya iniciado un procedimiento para su expulsión o extradición.

Respuesta a la cuestión 13

Personas fallecidas estando recluidas en centros de prisión provisional pertenecientes al sistema penitenciario de la Federación de Rusia

Años	Número de fallecidos	Causas del fallecimiento		
		Tuberculosis	Otras enfermedades	Otras causas
2009	401	45	188	168
2010	351	19	169	163
2011	332	14	166	152
2012	370	16	174	180
2013	396	8	195	193
Enero-Septiembre 2014	277	4	159	114

71. Todo tipo de trato indebido a personas detenidas, en prisión preventiva o condenadas, conlleva la respuesta correspondiente de la Comisión de Investigación, en cuya estructura se crearon unas subdivisiones especiales para la investigación de los delitos de esta categoría, así como de la Fiscalía General de la Federación de Rusia. Los funcionarios de los órganos de orden público que cometieren dichos delitos son enjuiciados con arreglo a la ley.

72. La Ley Federal de los Fundamentos de la Protección Sanitaria de los Ciudadanos de la Federación de Rusia establece las garantías de una atención médica adecuada a las personas reclusas en centros penitenciarios, al igual que los correspondientes reglamentos del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Servicio Federal de Ejecución Penal y de otros organismos competentes.

73. Con el objeto de prevenir el agravamiento de enfermedades crónicas o la aparición de estados que amenacen la supervivencia (complicaciones) se practican reconocimientos y exámenes médicos a las personas reclusas en centros penitenciarios. En caso de necesidad, se les presta atención médica inmediata o de urgencia en calidad de internos hospitalizados en centros sanitarios.

74. Se presta especial atención a las personas que presentan tendencia al suicidio o a la automutilación. Para prevenir el riesgo de que cometan tales actos, con estas personas se llevan a cabo medidas preventivas con la participación de un psicólogo. Con el objetivo de aumentar la eficacia del trabajo de diagnóstico psicológico, se utiliza el programa de diagnóstico psicológico automatizado "Psihometrik-Ekspert". Cada vez que tiene lugar un caso de suicidio se realiza una inspección oficial en la que participan representantes de todos los servicios competentes. Se establecen las causas que llevan a cometer actos de autoagresión, se valora el trabajo psicológico y educativo realizado con las personas con tendencias suicidas y se establece la responsabilidad que la ley determine para los responsables.

75. En base a los resultados de la instrucción y el enjuiciamiento de la causa penal abierta por el caso de fallecimiento en San Petersburgo de un adolescente de 15 años en enero de 2012, fueron condenados dos exfuncionarios de policía. Con arreglo a las sentencias del tribunal de 10 de septiembre de 2013 y 4 de junio de 2014 les fueron impuestas penas de privación de libertad de 9 y 6,5 años, respectivamente. El tercer funcionario de policía acusado en la causa penal falleció en febrero de 2012.

76. La instrucción de la causa penal sobre el fallecimiento de S. Nazarov en la comisaría de la policía N° 9 en Kazán en marzo de 2012 fue fusionada por los organismos de instrucción en el marco de una investigación más amplia de varias decenas de casos de actividades delictivas de antiguos miembros de esa comisaría. El 16 de junio de 2014 el tribunal dictó sentencia, según la cual ocho expolicías fueron condenados a distintas penas de privación de libertad. En la actualidad la sentencia ha sido recurrida por vía de apelación.

Respuesta a la cuestión 14

77. Gracias a los esfuerzos emprendidos por las autoridades rusas, el número total de infracciones cometidas mediante violencia en las fuerzas armadas de la Federación de Rusia continúa descendiendo de forma constante. De este modo, como balance de 2013, la cifra total de violaciones de las normas de relaciones reglamentarias entre los contingentes militares y de exlimitación de las prerrogativas del cargo, ligadas al empleo de violencia sobre subordinados, se redujo en más de un 10%, mientras que durante los nueve primeros meses de 2014 el descenso fue de casi un 20%. Del mismo modo, el número de víctimas de tales atropellos también está mostrando una tendencia continua a la baja.

78. Las autoridades rusas continúan llevando a cabo un plan de reformas que influyen positivamente en la mejora del ambiente moral y psicológico en las fuerzas armadas. Entre las medidas más importantes cabe destacar una reducción a la mitad en la duración del servicio militar obligatorio (de 24 a 12 meses), así como en ofrecer dependencias separadas, siempre que sea posible, a soldados de reemplazo y soldados por contrato. Además, la proporción de militares por contrato con respecto al total de efectivos continúa aumentando de forma constante.

79. A nivel normativo y jurídico se redujo significativamente el número de restricciones innecesarias en los derechos y libertades de los militares.

80. Está trabajando eficazmente un grupo de trabajo interdepartamental de lucha contra los tratos antirreglamentarios, las peleas y otros delitos violentos, integrado por funcionarios de alto rango de organismos federales del poder ejecutivo y de organismos militares de orden público.

81. Se ha visto reforzada la cooperación con organizaciones regionales de madres de soldados a las que, junto con otras organizaciones no gubernamentales, se les ha permitido participar en la realización de un control civil para la observancia del ordenamiento jurídico en las unidades militares. Para superar el estado latente de infracción de las leyes existente en este colectivo, en los cuarteles se ha colocado información sobre teléfonos de la esperanza, se han dispuesto centros de información y se imparten clases de información jurídica para militares.

82. La legislación de la Federación de Rusia considera inadmisibles los castigos corporales de los menores de edad en el hogar y en los centros de cuidado alternativo. Para más información sobre esta cuestión pueden consultarse los informes de la Federación de Rusia sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Respuesta a la cuestión 15

15 a)

83. De acuerdo con la legislación vigente, se prohíbe a los órganos de orden público y judiciales aplicar un trato discriminatorio en relación con cualquier grupo social, incluyendo a personas que consuman drogas. La práctica de registros, arrestos y detenciones, así como el acceso a registros médicos se realiza dentro de las causas previstas por la ley.

15 b)

84. Los legisladores rusos han decidido de manera fundamentada renunciar a la "curación" de la dependencia de opiáceos por medio de la terapia de sustitución mediante metadona. En Rusia la metadona está incluida en la lista de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como sus precursores, cuya importación, exportación y tránsito está prohibido. De acuerdo con la Ley Federal N° 3-FZ, de 8 de enero de 1998, de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, no está permitido el tratamiento de la toxicomanía mediante estupefacientes. Esta prohibición de por sí no influye sobre la posibilidad de que se utilicen para extraer confesiones forzadas de las personas detenidas. Al contrario, el hecho de que los funcionarios pudiesen recurrir a medios de terapia de sustitución podría llevarles a su utilización como chantaje con las personas drogodependientes a modo de "metadona a cambio de una confesión forzada".

15 c)

85. Durante el período de detención las personas drogodependientes gozan de todas las garantías de protección frente a cualquier acción violenta por parte de funcionarios de los

órganos policiales y judiciales, así como de asistencia médica en las mismas condiciones que otros ciudadanos que se encuentren recluidos en centros penitenciarios. Las correspondientes garantías médicas están consagradas, en particular, en la Ley Federal N° 323-FZ, de 21 de noviembre de 2011, de los fundamentos de la protección sanitaria de los ciudadanos de la Federación de Rusia; además del artículo 14 de la Ley Federal N° 67-FZ, de 26 de abril de 2014, de la Instrucción para el cumplimiento de penas de arresto administrativo, así como la Ley Federal N° 103-FZ, de 15 de julio de 1997, de prisión provisional de imputados y procesados en su artículo 24. Mediante la Ley N° 317-FZ, de 25 de noviembre de 2013, fue incluido el artículo 24 en este último instrumento normativo como una indicación clara acerca de la necesidad urgente de adoptar medidas encaminadas a la organización de asistencia médica a personas en las que se observe un empeoramiento en su estado de salud.

86. En caso de no poder prestar asistencia médica en los centros penitenciarios, las personas que se encuentren en prisión preventiva o en cumplimiento de una pena en régimen de privación de libertad tienen derecho a recibir asistencia médica en organismos del sistema estatal y municipal de salud, así como a que se les ofrezca ser enviados a la consulta de los médicos especialistas pertenecientes a los organismos sanitarios mencionados, de conformidad con las normas aprobadas mediante la resolución del Gobierno de la Federación de Rusia N° 1466 de 28 de diciembre de 2012.

87. El empleo de la violencia queda descartado en personas drogodependientes que soliciten asistencia médica.

88. En algunas regiones de la Federación de Rusia existen centros médicos penitenciarios, pertenecientes al Servicio Federal de Ejecución Penal, cuya finalidad es la prestación de un tratamiento ambulatorio a personas condenadas que sufren el síndrome de dependencia de sustancias psicotrópicas, con capacidad para 8.281 personas en total, así como gabinetes de desintoxicación en dispensarios médicos de colonias y centros de prisión preventiva. Los métodos terapéuticos y de rehabilitación de drogodependientes han sido probados científicamente y se basan en una renuncia absoluta al consumo de drogas, así como en la formación de una actitud consciente de rechazo hacia su aceptación y hacia la consolidación de una remisión firme con la subsiguiente orientación hacia un modo de vida sano.

89. En abril de 2012 el Servicio Federal de Ejecución Penal aprobó el Programa de desarrollo de la rehabilitación médica y social para personas con problemas de toxicomanía en centros penitenciarios. Sus principales aspectos son la creación de una red de subdivisiones para la rehabilitación médica y social, lograr la reinserción laboral correspondiente a la categoría de la persona condenada y la realización de actividades basadas en criterios científicos y metodológicos encaminadas al logro de los aspectos del Programa mencionados. En 2013 fueron abiertos centros de rehabilitación experimentales. El proceso de rehabilitación es distinto para cada caso y su duración es de dos a seis meses. El Programa establece la creación de un entorno para la rehabilitación, el empleo de medidas basadas en psicofármacos, la creación de centros terapéuticos, deportivos y sanativos, junto con la aplicación de medidas psicoterapéuticas.

Respuesta a la cuestión 16

90. De acuerdo con el artículo 49, párrafo 3, apartado 3, del Código de Procedimiento Penal, el abogado defensor tiene derecho a participar en la causa penal desde el momento en que se hace efectiva la detención de una persona sospechosa de haber cometido un delito. Con arreglo al artículo 5, apartado 15, de dicho Código se considera el momento en que se hace efectiva la detención cuando empieza la privación efectiva de la libertad de circulación de la persona sospechosa de un delito. A la luz de las normas indicadas no surge

ninguna dificultad para establecer el momento en que el defensor comienza a tomar parte en la causa penal.

91. Al mismo tiempo, el párrafo 1 del artículo 96 del Código de Procedimiento Penal establece que los encargados de la instrucción del sumario estarán obligados a notificar a los familiares del sospechoso su detención antes de transcurridas 12 horas y en su defecto, a otros parientes o bien dar la posibilidad de hacerlo al propio sospechoso.

92. De acuerdo con el artículo 19, párrafo 1, de la Ley Federal de los Fundamentos de la Protección Sanitaria de los Ciudadanos de la Federación de Rusia, toda persona tiene derecho a recibir asistencia médica. El artículo 26, párrafo 1, de esa Ley estipula especialmente que a tal derecho pueden acogerse aquellas personas en relación con las cuales, en el marco de la legislación de procedimiento penal, se haya aplicado la medida procesal coercitiva de detención. En virtud de esa Ley, la posibilidad de que un ciudadano pueda recibir asistencia médica no guarda relación con el hecho de que el informe de detención haya sido redactado.

Respuesta a la cuestión 17

93. Las autoridades rusas continúan desarrollando un programa a gran escala para la reforma del sistema penitenciario, cuyos principales objetivos y parámetros se establecen en el Marco de desarrollo del sistema penitenciario de la Federación de Rusia hasta 2020 y en el Plan de acción federal de "Desarrollo del Sistema Penitenciario para 2007-2016".

94. Teniendo en cuenta la resolución experimental del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa *Ananyev y otros contra Rusia*, las principales líneas de actuación de la política estatal en este campo son: a) armonizar las condiciones de detención con las normas internacionales; b) reducir el número de personas en centros de prisión provisional durante la fase preparatoria del proceso penal; y c) reducir el número de personas que cumplen condena en centros penitenciarios por sentencia del tribunal.

95. Se están asignando importantes recursos del presupuesto federal de la Federación de Rusia para la construcción de nuevos centros de prisión provisional y centros penitenciarios, junto con la reconstrucción de los ya existentes. Durante el período de vigencia del mencionado plan de acción federal fueron creadas más de 10.700 plazas adicionales en los centros de prisión provisional. En el curso de las reparaciones generales que se realizan a edificios y construcciones, se renuevan los sistemas de ventilación, iluminación, agua y calefacción en las celdas, al tiempo que se sustituyen aparatos sanitarios. Se renueva el equipamiento de los centros médicos pertenecientes al sistema penitenciario. A las personas que se encuentren en prisión preventiva se les ofrece la posibilidad de recibir a familiares y otras personas, entrevistarse con psicólogos, participar en ritos religiosos y realizar actividades deportivas en patios de recreo acondicionados con material deportivo.

96. En el marco de medidas encaminadas a reducir el número de personas en centros de prisión provisional durante la fase preparatoria del proceso penal, se introdujo una serie de cambios en la legislación que reducen el grupo de personas que pueden ser objeto de una medida coercitiva como la detención preventiva, al tiempo que establecen la posibilidad de conmutar esa medida por medidas cautelares más leves en aquellos casos en que el imputado o procesado sufra una enfermedad grave que impida su detención. Asimismo, fueron introducidos ajustes para permitir que durante los últimos años aumentasen significativamente las posibilidades de aplicar el arresto domiciliario y la fianza como medida cautelar.

Sentencias formuladas por los tribunales que imponen la prisión provisional como medida cautelar

Año	2009	2010	2011	2012	2013
Número de sentencias (en miles)	187,8	148,6	135,8	132,9	133,3

c) Véase la respuesta a la cuestión 18 *infra*.

Respuesta a la cuestión 18

97. La legislación penal de la Federación de Rusia prevé algunos tipos de penas que no implican el aislamiento de la sociedad. Esto incluye penas tales como multas, privación del derecho de ocupar determinados cargos o dedicarse a determinadas actividades, trabajos obligatorios, trabajos tutelados con retención de salario, y penas limitativas de libertad.

98. Penas limitativas de libertad. Constituye un nuevo tipo de pena, que se aplica desde 2010 y consiste en imponer al condenado ciertas restricciones (no abandonar su domicilio a horas determinadas, no cambiar de domicilio, lugar de trabajo o estudios sin el consentimiento de la autoridad estatal competente, etc.). En el período transcurrido desde el 1 de enero de 2010 hasta el 1 de julio de 2014 este tipo de pena fue impuesta como pena principal a más de 75.000 condenados.

99. Trabajos obligatorios. Esta pena se aplica en la Federación de Rusia desde 2005 y consiste en el cumplimiento por parte del condenado de trabajos socialmente útiles y no remunerados durante el tiempo libre de su trabajo principal o de sus estudios, el cual no podrá ser superior a las cuatro horas diarias, en empresas elegidas por los organismos de administración autónoma local de acuerdo con los órganos de inspección del cumplimiento de sanciones penales. Cada año se imponen trabajos obligatorios como pena principal en más de 70.000 casos, lo que equivale aproximadamente al 10% del número total de condenas.

100. Según los datos estadísticos judiciales, la multa (entendida como una pena pecuniaria recaudada en beneficio del Estado) se impone como pena principal en más de 110.000 condenas al año (cerca del 15% del total de condenas).

101. En el período de 2010 a 2014 se observa un aumento en el número de condenas de trabajos tutelados con retención de sueldo (un tipo de condena que prevé la retención en beneficio del Estado de un porcentaje del sueldo del condenado). Cabe observar que el número de condenas de este tipo en 2013 representó un 10,3% del total (más de 75.000 personas), mientras que en 2010 fue de un 4,9% (41.200 personas), respectivamente.

102. A partir de 2017 está previsto introducir un nuevo tipo de pena: el trabajo forzoso, que los condenados cumplirán en centros penitenciarios creados a tal efecto con percepción de un sueldo. Este tipo de condena se convertirá en una alternativa a la privación de libertad y reducirá aún más el número de personas condenadas a penas de prisión.

103. Asimismo, cabe destacar que la legislación de la Federación de Rusia establece un conjunto de normas que pueden eximir al condenado del cumplimiento real de la pena en centros penitenciarios, concretamente en los supuestos de: a) prisión condicional; b) enfermedad; c) embarazo o el hecho de que tenga hijos de corta edad; d) libertad condicional; e) sustitución de la parte no cumplida de la condena por un régimen menos duro. Estas normas comenzaron a aplicarse en 2012 y también ofrecen la posibilidad de exención del cumplimiento de la pena a condenados que se encuentren en fases finales del proceso de rehabilitación de la toxicomanía, así como en otros tipos de rehabilitación médica y social.

104. De acuerdo con las enmiendas introducidas en el Código Penal de la Federación de Rusia, han quedado suprimidas en más de 100 artículos las penas mínimas de prisión, y determinados delitos llevan ahora aparejadas penas no privativas de libertad. Además de ello, se amplió la categoría de delitos menos graves y de mediana gravedad y también se contempla la posibilidad de que el juez califique un delito de menos grave.

105. Como resultado de esto, a día de hoy el número de personas cumpliendo condena en centros penitenciarios se ha reducido aproximadamente en un 20% en comparación con los indicadores de 2008.

106. Con el objeto de lograr la reeducación de los reclusos y de impedir la comisión por su parte de nuevos delitos, se lleva a cabo con ellos un trabajo de carácter psicológico y educativo. En esta labor se hace hincapié en el trabajo con los condenados menores de edad. Se informa a los condenados de las disposiciones de la legislación vigente en el ámbito de la inserción laboral. También se organizan reuniones con representantes de los servicios de empleo y las organizaciones sociales. Los trabajadores sociales prestan su ayuda en la tramitación de documentos que las personas condenadas necesitan para percibir pensiones, prestaciones sociales y otras asignaciones en efectivo. Se ha establecido una cooperación eficaz con organizaciones religiosas. Se presta ayuda a todos los condenados en el restablecimiento de relaciones socialmente útiles.

107. En la efectividad de la política penitenciaria juegan un papel importante las comisiones públicas de vigilancia. Sus miembros tienen derecho a visitar centros penitenciarios sin obstáculos (esto es, sin tener que recibir permisos especiales), informando de su visita previamente a la administración del centro correspondiente. El procedimiento de formación de las comisiones públicas de vigilancia garantiza suficientemente su independencia e imparcialidad. Con arreglo al artículo 23, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia, los miembros de las comisiones públicas de vigilancia tienen derecho a entrevistar a personas condenadas en condiciones que permitan que puedan ser vistos pero no escuchados por miembros de la dirección de los centros penitenciarios, garantizando así la confidencialidad de tales entrevistas.

Respuesta a la cuestión 19

108. En el sistema jurídico de la Federación de Rusia los jueces poseen un elevado estatus que les da todas las posibilidades para administrar justicia de forma independiente e imparcial. Las correspondientes garantías procesales y materiales se establecen, en concreto, en la Constitución y en la Ley N° 3132-1, de 26 de junio de 1992, sobre el Estatuto de los Jueces en la Federación de Rusia, cuyas características más relevantes son:

a) Prohibición de cualquier injerencia en el ejercicio de la actuación judicial y obligación de los jueces a hacer pública en el sitio web oficial del juzgado en Internet la información sobre cualquier actuación extraprocesal (art. 10);

b) Desarrollo del contenido del artículo 121, párrafo 1, de la Constitución, estableciendo el principio de inamovilidad de los jueces (art. 12);

c) Establecimiento del principio de inmunidad de la judicatura (art. 16);

d) Creación de unas garantías sólidas para asegurar la independencia económica de los jueces (arts. 19 y 20), así como de su obligación de rendir cuentas cada año de sus ingresos y patrimonio. También deberán dar cuenta de los ingresos de su cónyuge e hijos menores de edad (art. 8.1).

109. Asimismo, mediante la Ley de la Carrera Judicial se establecieron unos requisitos concretos para los candidatos a ocupar la magistratura (arts. 4 y 4.1) y unas reglas detalladas para la selección mediante oposición de los candidatos por los colegios de calificación de jueces (art. 5) y para el nombramiento de jueces (arts. 6 y 6.1).

110. La Ley también prevé un reducido número de causas para la aplicación de sanciones disciplinarias a jueces (art. 12.1), así como para su suspensión o destitución (arts. 13 y 14).

111. En relación con la independencia del poder judicial, el Tribunal Constitucional dictó el 20 de julio de 2011 su fallo N° 19-P, por el que declara inconstitucional toda disposición normativa que permita incoar una causa penal contra un juez por los delitos tipificados en el artículo 305 del Código Penal (pronunciamiento de sentencias, fallos u otras resoluciones judiciales a sabiendas ilícitas) si dicho fallo ilícito imputado al juez hubiera entrado en fase de ejecución sin que fuera revocado como contempla el derecho procesal.

112. En su fallo de 20 de abril de 2010 N° 9-P, el Tribunal Constitucional estimó que no podía imponerse a los jueces una sanción disciplinaria como la revocación de su competencia por un error judicial si hubieren actuado bajo la discreción judicial sin incurrir en graves irregularidades durante la aplicación del derecho sustantivo y procesal que hicieran imposible que este continuara ejerciendo sus competencias judiciales.

19 a)

113. Con el objeto de reducir la carga de trabajo de los jueces, las autoridades emprenden tanto acciones de organización administrativa, encaminadas a adaptar al colectivo de jueces y funcionarios de la administración de justicia a las necesidades actuales, como medidas jurídicas y normativas. A este último grupo pertenece en particular la Ley Federal N° 193-FZ, de 27 de julio de 2010, aprobada ese mismo año, del procedimiento alternativo para el arreglo de litigios con la participación de un intermediario (el procedimiento de mediación), cuyas normas incentivan la solución de conflictos sin tener que llegar a juicio.

19 b)

114. Las disposiciones establecidas en el artículo 2, párrafo 1, el artículo 3, párrafos 2 y 3, y el artículo 18 de la Ley Federal N° 63-FZ, de 31 de mayo de 2002, de las Actividades de los Abogados y la Abogacía en la Federación de Rusia, así como las correspondientes normas de derecho procesal, dotan a los abogados de una condición profesional independiente con respecto a los órganos de instrucción y enjuiciamiento. La objetividad e imparcialidad de los abogados también queda asegurada en el principio fundamental de la prestación de asistencia jurídica gratuita (art. 5 de la Ley Federal N° 324-FZ, de 21 de noviembre de 2011, de la Asistencia Jurídica Gratuita en la Federación de Rusia).

115. De acuerdo con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 31 de la Ley de las Actividades de los Abogados y la Abogacía en la Federación de Rusia, el procedimiento de prestación de asistencia jurídica por abogados que participen como defensores en las causas penales mediante nombramiento de los órganos de instrucción o enjuiciamiento, así como el control de su cumplimiento por parte de los abogados, corresponde al Consejo del Colegio de Abogados y no a las autoridades públicas. La determinación del importe de la remuneración adicional a abonar por cuenta de los recursos del Colegio de Abogados al abogado que presta ayuda jurídica a ciudadanos de la Federación de Rusia de forma gratuita (incluidos los casos de designación por las autoridades públicas), también es competencia del Consejo del Colegio de Abogados.

116. Con arreglo al artículo 13 de la Ley Federal de la Asistencia Jurídica Gratuita en la Federación de Rusia, corresponde a los organismos de la Fiscalía de la Federación velar por el cumplimiento de las leyes en lo relativo a garantizar a los ciudadanos una asistencia jurídica gratuita, los cuales son independientes de los órganos de instrucción y enjuiciamiento. En caso de detección de infracciones, los organismos de la fiscalía tienen derecho a acudir ante la justicia según el procedimiento establecido con denuncias que atañan a la defensa de los derechos, libertades e intereses legítimos de los ciudadanos.

19 c)

117. Un aspecto prioritario del logro de una mayor eficacia en el cumplimiento de las decisiones judiciales es la ampliación del empleo de las nuevas tecnologías en el acto de ejecución. Desde el año 2009 el Servicio Federal de Alguaciles realiza un trabajo centrado en la formación de un sistema único automatizado que englobe cada uno de los departamentos y todas las áreas de actividad del servicio de alguaciles y actuarios. Desde 2012 en el sitio web oficial del Servicio Federal de Alguaciles (www.fssprus.ru) existe una base de datos sobre actos de ejecución que ofrece información sobre actos de ejecución iniciados por motivo de deudas, al tiempo que permite la liquidación de dichas deudas mediante diferentes métodos de pago. Asimismo, el Portal único de servicios estatales y municipales ofrece los servicios correspondientes.

118. Al mismo tiempo, fue establecida por ley la posibilidad de que los alguaciles emitieran resoluciones mediante documentos electrónicos autenticados con firma electrónica, así como el envío de notificaciones a las partes en actos de ejecución por redes telemáticas.

119. En la actualidad se está trabajando en la organización de la tramitación de la documentación por medios electrónicos entre el Servicio Federal de Alguaciles y el Tribunal Supremo, por un lado, y por el Departamento Judicial del Tribunal Supremo, por otro.

120. De los 95,4 millones de causas en fase de ejecución iniciadas en virtud de fallos judiciales, en el período de 2009 a octubre de 2014, fueron concluidas 51 millones con ocasión de su ejecución *de facto*, lo que representa un 53,5% del total.

Respuesta a la cuestión 20

121. Las autoridades rusas no disponen de datos que atestigüen la existencia de "la altamente reducida proporción de absoluciones en las causas penales", ni de la "parcialidad de los fiscales en el sistema judicial".

122. Una parte significativa de las causas penales son examinadas por los tribunales rusos mediante un procedimiento especial: es decir; los casos en que el acusado reconoce las acusaciones presentadas contra él, y el tribunal, en consecuencia, no puede dictar una sentencia absolutoria. Por tanto, las causas en que los tribunales fallaron mediante un procedimiento especial no pueden ser tenidas en cuenta a la hora de calcular la proporción de sentencias absolutorias. Asimismo, tampoco deberán tomarse en consideración las causas que, tras su examen, se haya resuelto aplicar medidas de tratamiento médico a personas con sus facultades mentales perturbadas. Teniendo en cuenta estas observaciones, las estadísticas judiciales correspondientes al período 2012-2014 indican que el número de personas con causas penales abiertas con respecto a las cuales los tribunales dictaron sentencias absolutorias o emitieron un auto de sobreseimiento por exculpación representan aproximadamente un 5% del total procesados cuyas causas son tratadas con arreglo al procedimiento ordinario. A este respecto cabe mencionar que desde 2012 se observa una tendencia al aumento en el número de personas respecto a las cuales los tribunales pronuncian fallos absolutorios. Así, por ejemplo, en el año 2013 el número de ciudadanos absueltos aumentó en un 9,4% (pasando de 5.164 personas en 2012 a 5.651 en 2013).

123. La legislación procesal de la Federación de Rusia ofrece salvaguardas que protegen al ciudadano del envío a los tribunales de causas penales con acusaciones infundadas. De este modo, según los artículos 221 y 226 del Código de Procedimiento Penal, antes de la presentación de una causa penal ante un tribunal, es necesaria su presentación al fiscal, el cual, como figura procesal independiente de los organismos de instrucción y de las diligencias urgentes, podrá devolver la causa penal a los encargados de la instrucción de las diligencias urgentes, pudiendo solicitar la modificación de los términos de la acusación o la

tipificación de los hechos imputados. Además, en el marco de causas en que las investigaciones preliminares se llevan a cabo en forma de diligencias urgentes, la Fiscalía podrá decidir sobre el sobreseimiento de la causa penal. De este modo, una parte significativa de causas que, en caso de ser admitidas para su conocimiento por el tribunal, previsiblemente podrían ser resueltas en forma de sentencias absolutorias, simplemente no llegan a los tribunales, al no confirmar el fiscal la acusación presentada por los órganos encargados de la instrucción.

124. La situación jurídica de la Fiscalía de la Federación de Rusia está regulada por la Constitución y por la Ley Federal N° 2202-1, de 17 de enero de 1992, de la Fiscalía de la Federación de Rusia, las cuales garantizan el nivel necesario de independencia e imparcialidad de este órgano del Estado.

20 a)

125. La legislación rusa garantiza la independencia de los jurados, así como su protección contra la influencia exterior y la manipulación. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Federal N° 113-FZ, de 20 de agosto de 2004, de Jurados Federales en los Tribunales Federales de Jurisdicción General de la Federación de Rusia, las garantías de independencia e inmunidad de la judicatura, incluidas las salvaguardias establecidas mediante la Ley Federal N° 45-FZ, de 20 de abril de 1995, sobre la Protección Estatal de los Jueces y Funcionarios de Orden Público y los Órganos de Inspección, son extensivas a los jurados durante el tiempo en que estos administren justicia. Cualquier injerencia en la actividad del jurado en el cumplimiento de la labor de administración de justicia está penada por la ley. Están prohibidas las comunicaciones extraprocesales con el jurado. Los artículos 295 a 297, 298.1 y 311 del Código Penal determinan la responsabilidad por las actuaciones ilícitas respecto de los jurados.

20 b)

126. Las disposiciones del artículo 40.1 del Código de Procedimiento Penal no conceden a los jueces poderes excesivos que podrían contribuir a la toma de decisiones infundadas sobre el procedimiento judicial.

20 c)

127. El acceso del abogado (defensor) al sumario está garantizado en la práctica del procedimiento penal sin que medie ningún tipo de dificultad seria. En particular, el artículo 53 del Código de Procedimiento Penal establece que, desde el momento en que se autoriza a la defensa a participar en la causa penal, esta tendrá derecho a conocer el atestado, el auto de aplicación de medidas coercitivas, los protocolos de las investigaciones realizadas con la participación del imputado o procesado, o cualquier otro documento que se les haya presentado o que debería haberles sido presentado. Además, tiene derecho a conocer todos los materiales pertenecientes a la causa penal y pruebas materiales a la finalización de la instrucción del sumario, así como a extraer de la causa penal cualquier información independientemente de su extensión hacer por cuenta propia copias de los materiales de la causa penal, pudiendo servirse de medios técnicos para tal fin. El derecho al conocimiento de los materiales de la causa a la finalización de la instrucción no tendrá límites de tiempo (art. 217 del Código de Procedimiento Penal).

128. De acuerdo con los artículos 227 y 248 del Código de Procedimiento Penal, en el curso de la fase judicial del procedimiento penal el tribunal podrá, a instancia de cualquiera de las partes, otorgar la posibilidad de conocer con mayor profundidad los materiales de la causa penal. En el supuesto de producirse una sustitución de la defensa, el juez ofrecerá tiempo al nuevo defensor para que pueda conocer el sumario y preparar su participación en

las actuaciones judiciales. A instancias de la defensa, el tribunal también podrá repetir el interrogatorio realizado a testigos, víctimas, peritos u otras actuaciones.

129. Las anteriores salvaguardas han sido confirmadas además por la práctica del Tribunal Constitucional. En su resolución N° 173-O, de 12 de mayo de 2003, indicó que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal no impiden que los inculcados, cuyos derechos y libertades se contemplan en las decisiones judiciales sobre la imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva o sobre la prórroga del plazo de reclusión, ni sus defensores consulten los autos, en virtud de las cuales se adoptan estas decisiones. Además, en la sentencia N° 2162-O, de 7 de octubre de 2014, el Tribunal Constitucional llegó a la conclusión de que un tribunal, que tras la devolución de la causa al fiscal esté decidiendo sobre la cuestión de la prórroga del plazo de reclusión con el objeto de conocer los materiales de la causa penal, debe guiarse ante todo por la necesidad incondicional de salvaguardar el derecho del procesado al conocimiento de los materiales que sean nuevos para él o que no figurasen con anterioridad en el sumario (esto es, con aquellos que fueron añadidos en el transcurso de la eliminación de los obstáculos indicados por el tribunal para su enjuiciamiento y que él todavía desconocía).

Respuesta a la cuestión 21

130. Sobre cada caso de actos ilícitos cometidos en relación con el desempeño por abogados de su actividad profesional, los organismos de orden público adoptan todas las medidas posibles para la identificación y el castigo de los culpables.

21 a)

131. En las investigaciones practicadas se determinó que el 20 de enero de 2012 en Makhachkala los organismos de orden público emprendieron acciones para la detención de los ciudadanos Saidmagomedov y Kurbanov, involucrados en actividades de formaciones armadas ilícitas. Al intentar detener el automóvil en el que se encontraban los sospechosos, estos últimos abrieron fuego mediante un arma de fuego y trataron de escapar. Resultaron muertos como consecuencia de los disparos de respuesta efectuados por agentes del orden. Tras la investigación se confirmó la legalidad de la actuación de los agentes del orden.

21 b)

132. Según la información de que disponemos, M. Abubakarov no presentó denuncias ante los organismos de orden público en relación con las presuntas amenazas recibidas en su domicilio en enero de 2013 en Grozny. Asimismo, el 22 de febrero de 2013 organismos de instrucción de la República de Kabardia-Balkaria incoaron una causa penal por las amenazas anónimas recibidas por el ciudadano indicado en febrero de 2013. Actualmente la investigación relativa a esta causa se ha suspendido ante la imposibilidad de determinar la persona que ha cometido el delito. Los organismos de la Fiscalía han considerado fundada la resolución. En la actualidad prosiguen las medidas dirigidas a establecer la identidad de las personas participantes en la comisión del delito.

21 c)

133. Como consecuencia de las denuncias presentadas por las abogadas Magomedova y Musa Suslanova de amenazas recibidas a causa de su actividad profesional fue incoada una causa penal, cuya instrucción prosiguen en la actualidad los organismos de orden público competentes.

Respuesta a la cuestión 22

134. Las autoridades rusas continúan emprendiendo medidas para la lucha contra la trata de personas, a nivel tanto nacional como internacional. En dicha tarea las autoridades se guían en particular por las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Para ampliar sus obligaciones internacionales en esta esfera, en 2013 la Federación de Rusia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual.

135. A nivel de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se están llevando a cabo programas de cooperación entre los Estados miembros para combatir la trata de personas. En octubre de 2013 se aprobó un programa de acción en este ámbito para 2014-2018. Además de ello, la Asamblea Interparlamentaria de los Estados Miembros aprobó la Ley Modelo de Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas, que establece, entre otras medidas, la creación de un conjunto de principios organizativos y jurídicos para la prestación a las víctimas de la trata de personas de un conjunto mínimo de servicios sociales, en particular, medidas de asistencia psicológica, jurídica, social, médica y otras formas de asistencia.

136. A nivel nacional la legislación rusa establece la responsabilidad penal no solo por la trata de personas (art. 127.1 del Código Penal), sino también por la privación de la libertad, la utilización del trabajo en condiciones de esclavitud (art. 127.2 de dicho Código), la inducción a la prostitución (art. 240) y la organización de la práctica de la prostitución (art. 241). En los últimos años se introdujo una serie de modificaciones y adiciones en la legislación federal orientadas a prevenir la trata de niños, su explotación y la prostitución infantil, así como un incremento de la responsabilidad por esos actos y los delitos contra la integridad sexual de los menores de edad (Leyes Federales N^{os} 377-FZ, de 27 de diciembre de 2009, 14-FZ, de 29 de febrero de 2012, 58-FZ, de 5 de abril de 2013, y 432-FZ, de 28 de diciembre de 2013, entre otras).

Datos estadísticos sobre delitos tipificados por el artículo 127.1 del Código Penal (Trata de personas)

<i>Años</i>	<i>Número de delitos registrados</i>	<i>Número de condenas por sentencia de los tribunales (con arreglo al presente artículo)</i>
2012	70	29
2013	66	28
Primer semestre 2014	14	4

137. Las víctimas de la trata de personas reciben asistencia médica, psicológica, material y jurídica. En esta tarea participan tanto las instituciones médicas estatales y municipales junto con los organismos de protección social, como las organizaciones no gubernamentales encargadas de prestar la ayuda necesaria a las víctimas. Se presta una particular atención a la prestación de asistencia psicológica oportuna a las víctimas de la trata menores de edad.

Respuesta a la cuestión 23

138. De acuerdo con el artículo 19, párrafo 3, del Pacto, el derecho a la libertad de opinión y de expresión no solo establece las posibilidades correspondientes para ciudadanos y organizaciones, sino que impone sobre ellos deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones. Las normas del Pacto

correspondientes a las disposiciones indicadas están consagradas en la Constitución (art. 29 y art. 55, párrafo 3).

23 a)

139. Teniendo en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, los legisladores rusos tienen derecho a elegir el planteamiento que consideren más oportuno para luchar contra actos ilícitos tales como la difamación, como, por ejemplo, tipificarla como delito, lo que está totalmente en consonancia con la práctica internacional, puesto que la difamación se considera delito penal en la mayor parte de los Estados.

23 b)

140. Habida cuenta de las amplias facultades discrecionales de que disponen las autoridades nacionales a la hora de fijar la pena correspondiente a los delitos contra los fundamentos del sistema constitucional y la seguridad nacional, el poder legislativo de la Federación de Rusia introdujo en noviembre de 2012 las puntualizaciones necesarias en el artículo 275 del Código Penal para definir el concepto de crimen de alta traición. Actualmente, la derogación de las enmiendas introducidas carece de fundamento.

23 c)

141. La Ley Federal N° 136-FZ, de 29 de junio de 2013, de incorporación de modificaciones en el artículo 148 del Código Penal y determinados instrumentos legislativos de la Federación de Rusia con el objeto de luchar contra las ofensas a las convicciones y sentimientos religiosos de los ciudadanos fue aprobada para concretar la reglamentación jurídica relativa a la responsabilidad de las personas que ofendan las convicciones religiosas de los ciudadanos y/o profanen objetos y bienes de culto religioso. La aprobación de esta Ley responde plenamente a la importancia para la seguridad del Estado y de la sociedad que se atribuye al mantenimiento de la convivencia interreligiosa, así como al peligro que entrañan los actos destinados a romper el equilibrio de intereses existente entre las distintas asociaciones religiosas. Numerosos Estados emplean instrumentos jurídicos análogos para preservar el derecho de los ciudadanos a la libertad de religión y la defensa de las creencias religiosas.

23 d)

142. La Ley Federal N° 398-FZ, de 28 de diciembre de 2013, de Incorporación de Modificaciones en la Ley Federal de la Información, las Tecnologías de la Información y de la Protección de la Información, busca la creación de un nuevo mecanismo de lucha contra las actividades extremistas. Esta necesidad se explica por el hecho de que Internet constituye un espacio para la difusión inmediata de información, incluida la que representa una amenaza para los derechos y libertades constitucionales. La existencia de riesgos asociada al uso de Internet con fines ilícitos es relativamente reciente, razón por la cual anteriormente no existía la necesidad de un mecanismo de estas características. El procedimiento que establece la Ley Federal N° 398-FZ se caracteriza por permitir un grado de operatividad suficiente, al tiempo que minimiza la posibilidad de que se produzcan restricciones arbitrarias de los derechos de los ciudadanos, puesto que solo está autorizado a decidir sobre el bloqueo de un sitio web un reducido grupo de personas formado por el Fiscal General de la Federación de Rusia o sus adjuntos. Al mismo tiempo, la decisión sobre la reanudación del acceso a un sitio web corresponderá al Servicio Federal de Vigilancia en la Esfera del Transporte, la Tecnología de la Información y los Medios de Comunicación mediante un procedimiento simplificado sin la participación de la Fiscalía.

23 e)

143. La Ley Federal N° 128-FZ, de 5 de mayo de 2014, de Enmiendas a Determinados Instrumentos Legislativos de la Federación de Rusia, establece unas medidas adecuadas de responsabilidad por la comisión de actos socialmente peligrosos, consistentes en la negación pública de hechos establecidos en el fallo del Tribunal Militar Internacional para el enjuiciamiento y castigo de los principales criminales de guerra de los países europeos del Eje, así como la aprobación de los delitos tipificados por dicho tribunal y la difusión de información falsa sobre la actuación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. La aprobación de esta Ley Federal obedece a la necesidad de defender a la sociedad y al Estado de los actos ilícitos cuya finalidad es la rehabilitación del nazismo y que podrían suponer una nueva amenaza para la paz y la seguridad pública. La legislación nacional de países como Austria, Bélgica, Alemania, Italia y Francia también establece la responsabilidad penal por la negación, aminoración, aprobación o justificación públicas de los crímenes nazis durante la segunda guerra mundial y la negación de los crímenes contra la humanidad establecidos por sentencia del Tribunal de Núremberg.

23 f)

144. En virtud de la Ley Federal N° 97-FZ, de 5 de mayo de 2014, de Incorporación de Modificaciones en la Ley Federal N° 149-FZ, de 27 de julio de 2007, de la Información, las Tecnologías de la Información y de la Protección de la Información y de otras leyes, los blogueros no son equiparables a los medios de comunicación. Los blogueros no deben atender a requisitos tales como el registro de su sitio web, tampoco les conciernen las normas análogas que limitan la utilización de medios comunicación por parte de extranjeros, ni se les exige la obtención de una licencia o cualquier permiso especial, entre otros. La única obligación que tienen los blogueros es cumplir las leyes de la Federación de Rusia en cuanto a la distribución o utilización de la información pública. La Ley concreta esta obligación indicando que los blogueros no deberán emplear su sitio web o página de un sitio web con fines ilícitos (en particular, difundir materiales que hagan un llamamiento público a la comisión de actividades terroristas o bien que divulguen información sobre la vida privada de ciudadanos en contravención de la legislación vigente).

145. Considerando lo expuesto, las autoridades rusas están convencidas de que las modificaciones legislativas anteriores concuerdan en su totalidad con las obligaciones internacionales de la Federación de Rusia en virtud del artículo 19 del Pacto.

Respuesta a la cuestión 24

146. La legislación de la Federación de Rusia tipifica como delito el entorpecimiento de las actividades legítimas de los periodistas (art. 144 del Código Penal). Al mismo tiempo, el Servicio Federal de Vigilancia en la Esfera del Transporte, la Tecnología de la Información y los Medios de Comunicación adopta medidas de carácter profiláctico y preventivo, destinadas a impedir el incumplimiento de los requisitos obligatorios en el ámbito del respeto de los derechos e intereses legítimos de los periodistas. Tras la comprobación de las comunicaciones sobre violaciones de los derechos e intereses legítimos de periodistas y redacciones de medios de comunicación, este Servicio formula recomendaciones para los funcionarios competentes.

147. Cada caso de actos ilícitos contra periodistas y defensores de los derechos humanos es objeto de comprobación e investigación.

148. Gracias a los resultados de la investigación de la causa abierta por el asesinato en enero de 2009 del abogado S. Markelov y de la reportera independiente de *Novaya Gazeta*,

A. Babúrova, en mayo de 2011 fueron condenados a sendas penas de prisión N. Tikhonov y E. Khasis.

149. El 9 de junio de 2014 fueron condenadas cinco personas por su participación en el asesinato en octubre de 2006 de la columnista de *Novaya Gazeta* A. Politkovskaya. Dos de ellas fueron condenadas a cadena perpetua, mientras que a las restantes se les impusieron penas de períodos prolongados de privación de libertad. La causa penal de uno de los partícipes, el exfuncionario de orden público D. Pavliuchekov, había sido separada previamente. El 14 de diciembre de 2012 por sentencia del tribunal Pavliuchekov fue condenado a 11 años en una colonia penitenciaria de régimen reforzado. En la actualidad se están adoptando medidas destinadas a establecer la identidad de la persona que ordenó el asesinato de Politkovskaya.

150. Con respecto al caso del asesinato de A. Akhmednabiev, los órganos de instrucción incoaron una causa penal con arreglo al artículo 105, párrafo 2, apartado b), el artículo 222, párrafo 1, y el artículo 167, párrafo 1, del Código Penal. Se emprendieron las medidas de investigación y búsqueda y captura necesarias para descubrir a los culpables. En la actualidad prosiguen las labores de investigación correspondientes.

151. Al mismo tiempo, continúa la investigación preliminar sobre la causa penal incoada en relación con el asesinato del periodista G. Kamalov en la República de Daguestán.

152. Asimismo, los órganos de orden público y judiciales están instruyendo la causa abierta por el secuestro y asesinato en julio de 2009 de N. Estemirova, integrante del Centro de Defensa de los Derechos Humanos *Memorial*. Durante la instrucción se ha interrogado a más de 1.300 personas en calidad de testigos, se han practicado más de 100 peritajes y se han examinado más de 4.000 comunicaciones dirigidas por ciudadanos y organizaciones. El presunto asesino es objeto de una orden de búsqueda federal e internacional.

Respuesta a la cuestión 25

25 a)

153. La legislación de la Federación de Rusia no establece ningún tipo de limitación discriminatoria de los derechos de las personas pertenecientes a las personas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales ni permite en la práctica la aplicación arbitraria de las normas correspondientes. Las autoridades rusas no impiden el ejercicio de los derechos de todas las personas interesadas a la libertad de reunión y asociación. Dentro de la observancia de las normas legislativas vigentes, los miembros de dicha comunidad tienen todas las garantías necesarias para la inscripción de sus asociaciones y la celebración de reuniones pacíficas. Al mismo tiempo, en el entorno ruso de Internet existen multitud de sitios web de esta orientación.

154. Cualquier acto de violencia, independientemente de si se comete contra un miembro de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales o de cualquier otro grupo social, conlleva la debida respuesta de los órganos de orden público. En el marco de las investigaciones correspondientes se esclarecen todas las circunstancias que rodean a un acto ilícito, incluyendo los motivos de su realización. Concretamente, el 4 de noviembre de 2013, los órganos de instrucción incoaron una causa penal relativa al ataque perpetrado contra miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el transcurso del acto reservado titulado "Rainbow Tea Party". Las acciones de los atacantes fueron tipificadas según el artículo 111, párrafo 2, apartado d), del Código Penal (ocasionar intencionadamente graves daños a la salud). En la actualidad continúan las labores de investigación y búsqueda y captura con el objeto de descubrir a los culpables.

25 b)

155. De acuerdo con las conclusiones del Tribunal Constitucional, en la sentencia N° 151-O-O, de 19 de enero de 2010, la prohibición de la propaganda de la homosexualidad, entendida como la difusión intencional y no controlada de información que puede causar un daño a la salud, la moral y el desarrollo espiritual, así como dar lugar a ideas tergiversadas sobre la igualdad del valor social de las relaciones familiares tradicionales y no tradicionales entre las personas que, debido a su edad, carecen de la capacidad necesaria para valorar crítica e independientemente esa información, no se puede considerar una violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

156. La posición jurídica del Tribunal Constitucional fue desarrollada por la resolución N° 24-P, de 23 de septiembre de 2014, en la cual se considera que las disposiciones del artículo 6.21 del Código de Infracciones Administrativas de la Federación de Rusia (promoción de relaciones sexuales no tradicionales entre menores) no contravienen la Constitución, ya que, según su propio significado constitucional y jurídico en el sistema de reglamentación jurídica en vigor, están orientadas a la defensa de valores constitucionales tan importantes como la familia y la infancia, así como a la prevención de daños a la salud de los menores y a su desarrollo moral y espiritual. Por otra parte, el Tribunal Constitucional destacó que dicho artículo no supone una intromisión en la esfera de las libertades individuales, incluyendo la opción sexual que elija cada persona, no tiene como objetivo la prohibición o reprensión oficial de relaciones sexuales no tradicionales, no impide el debate público e imparcial acerca de las cuestiones relativas a la condición jurídica de las minorías sexuales ni el empleo por sus miembros de todas las formas legales de expresión de su posición sobre estas cuestiones y de defensa de sus derechos e intereses legítimos, incluyendo el de la organización y celebración de manifestaciones públicas. Asimismo, teniendo en cuenta que solo los actos públicos pueden ser considerados ilegales, cuya finalidad es la difusión de información, la cual se divulga entre los menores o se les impone, incluida la que se basa en las circunstancias de la comisión de dicha acción, esto es, las relaciones sexuales no tradicionales, no cabe una interpretación amplia de la prohibición establecida por dicho artículo. Esta interpretación es de obligado cumplimiento para todas las autoridades públicas, empresas, instituciones, organizaciones, funcionarios, ciudadanos y sus asociaciones.

157. En general, las autoridades rusas están convencidas de que la legislación actual no se aplica para limitar de forma arbitraria la libertad de expresión y reunión pacífica de los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Las leyes de la Federación de Rusia y su puesta en práctica son acordes con las obligaciones contraídas por la Federación de Rusia en virtud del Pacto.

Respuesta a la cuestión 26

26 a)

158. La legislación de la Federación de Rusia no establece restricciones desproporcionadas al ejercicio del derecho a la libertad de reunión o de expresión. La Ley Federal N° 54-FZ, de 19 de junio de 1996, sobre Reuniones, Manifestaciones, Protestas y Piquetes, establece unos requisitos justificados en cuanto a la forma de organización de dichas manifestaciones y el procedimiento de notificación de su celebración. De conformidad con el artículo 12, párrafo 3, de esta Ley, las autoridades tendrán derecho a denegar la celebración de un acto público solo en los casos en que hubiera presentado la notificación correspondiente una persona que, con arreglo a la ley, no tenga derecho a organizar un acto público o bien si la ley prohíbe la celebración de actos públicos en el lugar consignado en la notificación. Además, las autoridades regionales establecen unos lugares designados especialmente para que la opinión pública pueda expresarse en lugares

públicos sin que sea necesaria una notificación previa a las autoridades. Por ejemplo, en Moscú existen dos zonas situadas en parques de la ciudad con capacidad para 3.500 personas, en las cuales la celebración de manifestaciones públicas no requiere la notificación previa a las autoridades.

159. Los fallos del Tribunal Constitucional N° 12-P, de 18 de mayo de 2012, N° 4-P, de 14 de febrero de 2013, y N° 14-P, de 13 de mayo de 2014, junto con su dictamen N° 705-O-O, de 1 de junio de 2010, establecen garantías adicionales al derecho a la libertad de reunión.

160. Al mismo tiempo, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión no puede vulnerar los derechos y libertades de otros ciudadanos, en particular su derecho a la seguridad personal y pública, que debe ser garantizada por las fuerzas del orden durante la celebración de actos públicos. Por tal motivo, en el supuesto de incumplimiento por parte de sus participantes de los requisitos establecidos por la legislación vigente, los infractores serán detenidos por agentes del orden y, cuando haya motivos para ello, se hará que respondan ante la justicia. En el desempeño de sus funciones, los agentes de las fuerzas del orden se rigen estrictamente por la ley y la aplican de igual manera a todos los participantes de cualquier acto público.

161. Cabe observar que la legislación de la Federación de Rusia no contempla la "pena de prisión por expresar las propias opiniones políticas".

162. La apertura de actuaciones penales contra una serie de personas por el denominado "caso Bolotnaya", en relación con los sucesos acaecidos el 6 de mayo de 2012 en la plaza Bolotnaya de Moscú, se basa en las pruebas de la parte que desempeñaron en la organización de desórdenes públicos o su participación en ellos, reunidas durante la instrucción y examinadas durante la vista de la causa (art. 212 del Código Penal), así como en el empleo de la violencia contra agentes del orden público (art. 318 del Código Penal), y no tiene otra motivación salvo la basada en la ley. En el curso de esos actos ilícitos, los participantes en los desórdenes públicos emplearon la violencia contra más de 80 representantes de las autoridades, 44 de los cuales sufrieron daños físicos de diversa gravedad. En la actualidad prosigue la instrucción del sumario de esta causa.

26 b)

163. En el supuesto de admisión de una infracción de la legislación vigente por parte de miembros de cualquier órgano de la autoridad, los afectados podrán exigir que los responsables respondan ante la justicia, así como una indemnización por el daño moral y material causado, de acuerdo con lo establecido en las normas de la legislación penal, administrativa y civil u otra legislación aplicable en casos concretos.

26 c)

164. Hasta la fecha, el concepto de "reunión espontánea" todavía no ha sido elaborado con detalle en la legislación vigente de la Federación de Rusia. En caso de que ello se haga necesario, las autoridades rusas estudiarán detenidamente la conveniencia de introducir las precisiones correspondientes en las normas jurídicas existentes y decidirán sobre esta cuestión.

Respuesta a la cuestión 27

165. La legislación de la Federación de Rusia contiene una amplia definición del extremismo que no está en contradicción con las obligaciones internacionales de la Federación de Rusia y que es aplicada debidamente por los órganos de orden público y judiciales (esta cuestión se expone con mayor detalle en los párrafos 19 a 28 *supra*).

166. En cuanto al respeto de los derechos de los Testigos de Jehová, cabe mencionar que, al 1 de octubre de 2014, el Registro Estatal Único de Personas Jurídicas de la Federación de Rusia actualmente en vigor contenía información sobre 390 organizaciones religiosas seguidoras de la doctrina de los Testigos de Jehová. La actividad de solo algunos de estos grupos ha sido interrumpida o cesada por decisión de un tribunal de la Federación de Rusia a causa del incumplimiento de la legislación vigente (se constataron hechos de imposición de doctrinas religiosas en lugares públicos, declaraciones ofensivas contra otras organizaciones religiosas o llamamientos a negarse a cumplir sus funciones en la sociedad, entre otros). Está prohibido que las autoridades rusas traten de forma discriminatoria o persigan a miembros de los Testigos de Jehová.

167. En el territorio de la Federación de Rusia, al 1 de octubre de 2014 existía un total de 27.315 organizaciones religiosas. De acuerdo con el artículo 4, párrafo 2, de la Ley Federal N° 125-FZ, de 26 de septiembre de 1997, de Libertad de Conciencia y de Asociaciones Religiosas, de acuerdo con el principio constitucional de separación de las asociaciones religiosas del Estado, los órganos del Estado no se inmiscuyen en la actividad de organizaciones religiosas, siempre que estas no incumplan la ley. El artículo 12 del instrumento jurídico mencionado ofrece una exhaustiva lista de motivos para denegar la inscripción en el registro estatal de organizaciones religiosas. La denegación de la inscripción oficial se podrá recurrir ante un órgano superior o por vía judicial.

Respuesta a la cuestión 28

168. Con respecto a los cambios introducidos en la Ley Federal N° 7-FZ, de 12 de enero de 1996, de las Organizaciones sin Fines de Lucro, desde julio de 2012 las organizaciones que acepten financiación exterior y que al mismo tiempo se dediquen a actividades políticas en el territorio de la Federación de Rusia, están obligadas someterse a un proceso especial de registro. Con ello el Estado en modo alguno limita el derecho de las organizaciones sin fines de lucro afectadas por esta medida a continuar su actividad y tomar parte en la vida política de la sociedad rusa. El principal objetivo de las enmiendas introducidas en la legislación es garantizar un mayor grado de transparencia en las actividades de esas organizaciones sin fines de lucro, ya que la sociedad rusa tiene derecho a conocer las fuentes de financiación de las actividades políticas que se desarrollan en territorio nacional. Las Leyes Federales N°s 18-FZ, de 21 de febrero de 2014, y 147-FZ, de 4 de junio de 2014, están destinadas a seguir perfeccionando la legislación en esta esfera y a concretar las atribuciones de los organismos estatales competentes. Al mismo tiempo, cualquier decisión de las autoridades que afecte al derecho y los intereses legítimos de las organizaciones sin fines de lucro puede recurrirse por vía judicial.

169. Las disposiciones principales de la legislación en esta esfera fueron objeto de examen por el Tribunal Constitucional, el cual en su fallo N° 10-P, de 8 de abril de 2014 reconoció que no eran contrarias a la Constitución. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional emitió unas explicaciones necesarias sobre el contenido del concepto de actividad política, que actualmente los organismos de orden público tienen en cuenta en su trabajo.

170. Teniendo en cuenta lo expuesto, las autoridades rusas están convencidas de que la reglamentación jurídica vigente en la Federación de Rusia es compatible con las disposiciones del Pacto.

Respuesta a la cuestión 29

29 a)

171. En relación con las desapariciones de T. Shaimardanov y S. Zinedinov, los órganos de instrucción incoaron las correspondientes causas penales en julio de 2014. En el marco

de la investigación fueron interrogados los familiares de las personas buscadas junto con otras personas. También se realizó un seguimiento informativo y se llevaron a cabo otras medidas necesarias de investigación y búsqueda y captura. En la actualidad prosiguen las labores de investigación.

172. Los órganos de instrucción de la República de Crimea y Sebastopol no han recibido denuncias sobre el secuestro de L. Korzh.

29 b)

173. En el marco de la investigación de la causa penal por el asesinato de R. Ametov hasta la fecha se ha realizado una cantidad significativa de actuaciones de investigación: se ha interrogado a más de 270 personas, se han emprendido más de 50 exámenes periciales y más de 50 inspecciones. En conjunto, se llevan a cabo todas las medidas necesarias para establecer la identidad de las personas culpables de este delito.

29 c)

174. Las acciones de los miembros de la llamada "autodefensa de Crimea" son debidamente evaluados desde el punto de vista legal por los organismos de orden público, del mismo modo que los actos cometidos por cualquier otro individuo. En el supuesto de que estos miembros cometan actos ilícitos, tales hechos se investigarán según el procedimiento establecido en la legislación de procedimiento penal o administrativa de la Federación de Rusia. En la actualidad han sido incoadas varias causas penales en las que figuran como sospechosos miembros de la "autodefensa de Crimea". Las correspondientes causas penales están relacionadas, en particular, con los actos de asalto con intento hurtador contra I. Ilyin en la aldea de Nikolaevka acaecidos en abril de 2014 y con varios casos de adquisición ilícita de medios de transporte bajo la amenaza del empleo de armas en mayo de 2014.

29 d)

175. En el territorio de la República de Crimea y Sebastopol funcionan plenamente más de 300 medios de comunicación, incluyendo medios de comunicación locales que se publican en el idioma tártaro de Crimea. Los organismos de orden público y las dependencias del Ministerio de Comunicaciones y Medios de Comunicación de la Federación de Rusia no han recibido comunicaciones acerca de "excesivas limitaciones al derecho de información y expresión en Crimea y actos de agresión, amenazas e intimidaciones a periodistas" en el territorio de dichas entidades constitutivas de la Federación de Rusia.

29 e)

176. Según lo establecido en las condiciones del Acuerdo entre la Federación de Rusia y la República de Crimea sobre la adhesión a la Federación de Rusia de la República de Crimea y de la formación en la Federación de Rusia de nuevas entidades constitutivas, de 18 de marzo de 2014, así como en el artículo 4 de la Ley Constitucional Federal N° 6-FKZ, de 21 de marzo de 2014, de la adhesión a la Federación de Rusia de la República de Crimea y de la formación en la Federación de Rusia de las nuevas entidades constitutivas de la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol, los ciudadanos que residan en el territorio de la República de Crimea y Sebastopol tienen derecho a decidir de forma libre y voluntaria sobre la cuestión de conservar la ciudadanía ucraniana o adquirir la de la Federación de Rusia.

177. A los ciudadanos de Ucrania y apátridas que a día 18 de marzo de 2014 residiesen de manera permanente en el territorio de Crimea se les concedió el derecho a decidir en el

plazo de un mes sobre si conservar otra nacionalidad que ellos y/o sus hijos menores de edad pudiesen poseer o el estatuto de apátrida.

178. Unas 3.900 personas presentaron solicitudes para conservar otra nacionalidad o para mantener su condición de apátrida.

179. Con arreglo al artículo 19, párrafo 1, de la Ley Federal N° 62-FZ, de 31 de mayo de 2002, de la ciudadanía rusa, la pérdida de la nacionalidad rusa por una persona que resida en el territorio de la Federación de Rusia se producirá según el procedimiento general mediante la declaración voluntaria de dicha persona. Según el procedimiento establecido, se concederá el permiso de residencia a los ciudadanos de la Federación de Rusia que hayan renunciado a su nacionalidad si así lo solicitan.

180. A las personas que han conservado su nacionalidad ucraniana o estatuto de apátrida se les concede el permiso de residencia para ciudadanos extranjeros o apátridas mediante solicitud redactada en formato libre, adjuntando una cantidad mínima de documentos (entre los que no se incluyen certificados médicos ni otros documentos que confirmen la posesión de medios de subsistencia legítimos).

181. Las personas que, residiendo de manera permanente en el territorio de la República de Crimea y Sebastopol, hayan sido reconocidas ciudadanas de la Federación de Rusia, en virtud del Acuerdo entre la Federación de Rusia y la República de Crimea sobre la adhesión a la Federación de Rusia de la República de Crimea y de la formación en la Federación de Rusia de nuevas entidades constitutivas, de 18 de marzo de 2014, así como de la Ley Constitucional Federal N° 6-FKZ, de 21 de marzo de 2014, y no deseen poseer la nacionalidad rusa pero que, con posterioridad al 18 de abril de 2014, hayan perdido el derecho a solicitar la conservación de otra nacionalidad que ostentasen o bien a mantener el estatuto de apátrida que poseyesen, podrán ejercer el derecho constitucional de cambio de nacionalidad.

182. Las autoridades rusas no han establecido casos de personas obligadas a renunciar a su nacionalidad ucraniana, ni tampoco de "actos de hostigamiento e intimidación contra quienes no solicitan la nacionalidad rusa".

29 f)

183. En 2014 no se registraron incidentes de conflictos interreligiosos en el territorio de la República de Crimea y Sebastopol. Por otra parte, los órganos de orden público y judiciales dedican una gran atención a prevenir la discriminación de los ciudadanos por motivos religiosos. Con este fin, durante el año 2014 se organizó una serie de reuniones de coordinación y mesas redondas con la participación de representantes de distintas confesiones, en las cuales se discutieron cuestiones apremiantes del trabajo en ese ámbito.

29 g)

184. En todas las entidades constitutivas de la Federación de Rusia, incluyendo la República de Crimea, se aplica la Constitución y la legislación rusa, las cuales garantizan una protección eficaz contra la discriminación por motivos de etnia.

185. Tras la adhesión a la Federación de Rusia de la República de Crimea en cumplimiento de Decreto del Presidente de la Federación de Rusia N° 268, de 21 de abril de 2014, los poderes públicos a todos los niveles llevan a cabo un trabajo especial dirigido a lograr un renacimiento político, social y espiritual de los pueblos armenio, búlgaro, griego, tártaro de Crimea y alemán, así como a crear y desarrollar para estos pueblos autonomías nacionales y culturales u otras asociaciones y organizaciones públicas, y también a aprovechar las posibilidades existentes para impartir la enseñanza general básica en el idioma de dichos pueblos y a desarrollar industrias y formas de economía tradicionales.

186. La Ley Federal de Procedimientos para la Salida de la Federación de Rusia y la Entrada en su Territorio establece las bases para la denegación del permiso de entrada en el territorio de la Federación. Todo acto de restricción a la entrada en el territorio de la Federación de Rusia podrá ser recurrido por las personas interesadas ante los tribunales competentes de Rusia.

Respuesta a la cuestión 30

187. El Ministerio de relaciones Exteriores de la Federación de Rusia pone en conocimiento de los órganos competentes los textos oficiales en ruso de las observaciones finales del Comité tras el examen de los informes periódicos de la Federación sobre el cumplimiento del Pacto y los dictámenes emitidos por el Comité sobre asuntos particulares, examinados según el procedimiento del Protocolo Facultativo del Pacto. La información pertinente se publica, en particular, en los informes sobre legislación y práctica judicial del Tribunal Supremo (véase el párr. 2 *supra*), así como en la revista "Rossiyskoe pravosudie".

188. En el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia (www.mid.ru) se hace pública información sobre los exámenes realizados por los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de los informes de la Federación de Rusia sobre la aplicación de tratados internacionales ratificados en materia de derechos humanos. Además, en la sección "Tratados internacionales" de dicho sitio web (http://www.mid.ru/bdcomp/spm_md.nsf) se ofrece un listado de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por la Federación de Rusia.

189. En el proceso de preparación del séptimo informe periódico de la Federación de Rusia sobre la aplicación de las disposiciones del Pacto se tuvo en cuenta información procedente de distintas organizaciones no lucrativas sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de las disposiciones de ese tratado internacional. En este contexto, las autoridades rusas confirman su interés en la mayor cobertura posible de las cuestiones pertinentes y en la continuación del diálogo constructivo y la cooperación con los representantes de todas las esferas de la sociedad civil.
